



JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, once de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	Acción de Tutela
Accionante	HECTOR DARIO CORREA TAMAYO
Accionado	AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS
Radicado	05001 40 03 028 2022-01274 00
Instancia	Primera
Providencia	Fallo tutela No. 288
Decisión	Concede amparo constitucional

I. TEMA

Procede esta dependencia judicial a decidir la acción de tutela instaurada por HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, por conducto de apoderada judicial en contra del AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS, por la presunta violación al derecho fundamental de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

II. ANTECEDENTES:

Hechos:

Manifiesta la apoderada judicial del accionante en síntesis que:

El 26 de septiembre de 2022 radicó ante PORVENIR un derecho de petición con el fin de, obtener información relacionada con la seguridad social (pensión) del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO al correo dispuesto en la página web de esta administradora para tales fines (porveniren-contacto.co). Ese mismo día PORVENIR a través de una respuesta automática confirma haber recibido el mismo.

Indica que ese mismo día 26 de septiembre de 2022 radicó también por medio del canal previsto para peticiones en la página web de COLFONDOS un derecho de petición con el fin de obtener información relacionada con la seguridad social

(pensión) del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, dicha petición fue radicada bajo el número 220926-000711.

Afirma que, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, COLFONDOS y PORVENIR no han dado trámite a las referidas solicitudes y, por ende, no ha recibido respuesta a las peticiones interpuestas con el objetivo de obtener información relacionada con la seguridad social (pensión) del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO.

Derechos vulnerados

Relaciona como vulnerado su derecho fundamental de petición.

Pretensiones:

Solicita la parte accionante expresamente que:

PRIMERO. Se tutelen los derechos fundamentales vulnerados, es decir, el derecho fundamental de petición y el derecho fundamental al debido proceso.

SEGUNDO. Que, como consecuencia de la tutela de la vulneración al derecho fundamental de petición y al debido proceso, se le ORDENE a las accionadas dar respuesta a los derechos de petición radicados en las fechas ya mencionadas, acatando los documentos con ellos anexos y acogiendo el poder anexo a las peticiones únicamente con la firma autenticada del poderdante HECTOR DARIO CORREA TAMAYO

Admisión y trámite de la tutela:

Por auto del 01 de noviembre del año en curso, este Despacho emitió auto mediante el cual se admitió la presente tutela en contra de AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS, concediéndoseles el término de un día para que se pronunciaran sobre la presente acción; providencia que se puso en conocimiento a la accionada mediante mensaje de datos remitido a su correo electrónico, con el cual se adjuntó copia del escrito de tutela con sus anexos, y del auto admisorio.

Contestación de las entidades accionadas

AFP PORVENIR

Esta entidad por conducto de la Directora de Acciones constitucionales de dicha entidad, indico que:

La solicitud demandada por la parte accionante, fue efectivamente resuelta a través de comunicación del 2 de noviembre de 2022, dando respuesta a su petición. (Adjuntamos prueba de entrega del correo electrónico certificado).

Por lo indicado por señala que porvenir no ha vulnerado ni pretende vulnerar el derecho de petición ejercido por el accionante, sino que por el contrario la petición se encuentra debidamente contestada, por tanto, solicita denegar o declarar improcedente la pretendida acción de tutela.

AFP COLFONDOS

Esta entidad se pronunció frente a la acción de tutela, aportando comunicación de fecha 03 de noviembre, con el que acredita responder el derecho de petición de fecha 26 de septiembre de 2022 y que le remitió al accionante el día 4 del mismo mes. Con ella anexo formulario de afiliación y el reporte de días acreditados-aportes

ASPECTOS JURÍDICO PROCESALES

No se advierte ningún vicio que pueda invalidar lo actuado hasta el presente momento procesal.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a este despacho establecer si el derecho fundamental constitucional de PETICIÓN del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, conforme se desprende de los hechos narrados en el escrito de tutela y los documentos anexos del mismo, han sido vulnerados por las entidades accionadas al no dar respuesta a las solicitudes elevadas el 26 de septiembre de 2022.

CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991 (Art. 37), este Juzgado es competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional en referencia, dada la naturaleza jurídica de la entidad y porque es

este el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho cuya protección se invoca.

LA ACCIÓN DE TUTELA

La Acción de Tutela fue instituida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, como un mecanismo preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los Derechos Fundamentales, permitiendo que toda persona pueda reclamar ante los Jueces la protección inmediata de éstos, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y eventualmente por los particulares.

Es así como las personas que ejercen la acción de tutela tienen un interés individual, particular y concreto, cual es el que se les proteja sus derechos constitucionales fundamentales frente a su vulneración o amenaza y que el Juez está obligado a restablecer, ya sea ordenando hacer lo omitido, cesar actuaciones o amenazas o deshacer lo hecho.

DERECHO DE PETICIÓN. T-230/20

Caracterización del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” Esta garantía ha sido denominada derecho fundamental de petición, con el cual se promueve un canal de diálogo entre los administrados y la administración, “cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

Formulación de la petición. En virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA). En otras palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar

procedimientos administrativos. Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley. En tratándose de autoridades judiciales, la solicitud también es procedente, siempre que el objeto del requerimiento no recaiga sobre procesos judiciales en curso.

Las peticiones también podrán elevarse excepcionalmente ante organizaciones privadas. En los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, se estipula que cualquier persona tiene el derecho de formular solicitudes ante entidades de orden privado sin importar si cuentan o no con personería jurídica, cuando se trate de garantizar sus derechos fundamentales. En el ejercicio del derecho frente a privados existen iguales deberes de recibir, dar trámite y resolver de forma clara, oportuna, suficiente y congruente, siempre que sean compatibles con las funciones que ejercen. En otras palabras, los particulares, independientemente de su naturaleza jurídica, son asimilables a las autoridades públicas, para determinados efectos, entre ellos, el relacionado con el derecho de petición.

Pronta resolución. Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición, consiste en que las solicitudes formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto.

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para dar respuesta, salvo que la ley hubiera determinado plazos especiales para cierto tipo de actuaciones. Esa misma disposición normativa se refiere a dos términos especiales aplicables a los requerimientos de documentos o información, y a las consultas formuladas a las autoridades relacionadas con orientación, consejo o punto de vista frente a materias a su cargo. Los primeros deberán ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la recepción, mientras que los segundos dentro de los 30 días siguientes.

De incumplirse con cualquiera de estos plazos, la autoridad podrá ser objeto de sanciones disciplinarias. Por ello, el párrafo del precitado artículo 14 del CPACA admite la posibilidad de ampliar el término para brindar una respuesta cuando por circunstancias particulares se haga imposible resolver el asunto en los plazos legales. De encontrarse en dicho escenario, se deberá comunicar al solicitante tal

situación, e indicar el tiempo razonable en el que se dará respuesta –el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto por la ley–. Esta hipótesis es excepcional, esto es, solo cuando existan razones suficientes que justifiquen la imposibilidad de resolver los requerimientos en los plazos indicados en la ley.

Cuando se trata de peticiones relacionadas con la solicitud de documentos o de información, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece un silencio administrativo positivo que opera cuando no se ha brindado respuesta dentro del término de 10 días hábiles que consagra la norma. En esos eventos, la autoridad debe proceder a la entrega de los documentos dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.

Como ya se anunciaba, el plazo para la respuesta de fondo se contabiliza desde el momento en que la autoridad o el particular recibieron la solicitud por cualquiera de los medios habilitados para tal efecto, siempre que estos permitan la comunicación o transferencia de datos. En otras palabras, los términos para contestar empiezan a correr a partir de que el peticionario manifiesta su requerimiento, (i) ya sea verbalmente en las oficinas o medios telefónicos, (ii) por escrito –utilizando medios electrónicos que funcionen como canales de comunicación entre las dos partes, o por medio impreso en las oficinas o direcciones de la entidad pública o privada–, o (iii) también por cualquier otro medio que resulte idóneo para la transferencia de datos.

Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”

La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información pública (art. 74 C.P.), dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado.” Sobre este punto, es preciso anotar que al tratarse de una garantía fundamental que permite el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales, así como la consolidación de la democracia, las restricciones al derecho de petición y de información deben ser excepcionales y deberán estar previamente consagradas en la ley. Al respecto, en el Título III de la Ley 1712 de 2014 se hace referencia a los casos especiales en los cuales se puede negar el acceso a la información, por ejemplo, entre otros, al tratarse de información clasificada y reservada, o que pueda causar daños a personas naturales o jurídicas en su derecho a la intimidad, vida, salud, seguridad o secretos comerciales, industriales y profesionales.

En las hipótesis en que la autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la competente para pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario.

Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.

CASO CONCRETO:

La apoderada judicial del accionante HECTOR DARIO CORREA TAMAYO interpuso esta acción constitucional, por considerar que la entidad AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS, le estaba vulnerando el derecho fundamental de petición a su mandante, debido a que no le habían dado respuesta a las solicitudes del 26 de septiembre de 2022 dentro del término señalado para ello.

Notificada las entidades AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS., en las direcciones de correo electrónico para efectos de notificaciones, ambas se pronunciaron, la primera indicando que le había dado respuesta al accionante el 02 de noviembre de 2022 y por tanto se configuraba un hecho superado, y la segunda no se pronunció estrictamente frente a los hechos de la tutela, sin embargo, aportó la respuesta que le entregó al accionante el día 04 de noviembre de 2022 vía correo electrónico, anexando a la respuesta, el formulario de afiliación a la entidad (borroso) y un detallado de los aportes a pensión realizado por el actor, indicando que para dar respuesta a lo peticionado por la apoderada del accionante, debía cumplir el poder, unas exigencias por política de la entidad

Estudio de la procedencia de la acción de tutela

Legitimación en la causa

En cuanto a la legitimación en la causa por activa las normas que reglamentan la acción de tutela exigen como presupuesto la legitimidad e interés del accionante, así se encuentra determinado en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros municipales.

Con referencia al acto de apoderamiento en la acción de tutela, la Corte Constitucional ha señalado los elementos del apoderamiento en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. (Ver T-194 de 2012) En el presente caso se cumple tal requisito en la medida que el poder fue presentado de forma escrita, se presume auténtico para el ejercicio de la acción de tutela y el mandatario es una persona natural, abogada titulada e inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Así también, se tiene probada la legitimación en la causa por activa, por cuanto quien promueve la acción de tutela, es HECTOR DARIO CORREA TAMAYO por conducto de apoderada, siendo esta, quien presentó los derechos de petición

objeto de la presente acción constitucional y los remitió desde su correo electrónico ante las accionadas, y que aún no había recibido las respuestas solicitadas, así como por pasiva, pues la tutela se dirigió contra AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS, encargados de gestionar las respuestas requerida por la parte accionante, y en razón de que son dichas entidades de quien se predica la vulneración del derecho en discusión.

Subsidiariedad

En relación con el derecho de petición, la Corte ha reconocido que el ordenamiento jurídico no tiene previsto un medio de defensa judicial diferente de la acción de tutela para su protección; por lo tanto, en este caso, la tutela resultaría procedente para solicitar que la entidad accionada responda el derecho de petición presentado por la parte accionante.

Inmediatez

Según los hechos narrados en la tutela los derechos de petición fueron instaurados el 26 de septiembre de 2022, por lo que la acción de tutela ha sido presentada en un plazo oportuno, independiente de considerar si el término para la entidad accionada dar respuesta ya había vencido.

Verificada la procedencia, se procede a determinar si a la parte accionante le ha sido vulnerado su derecho de petición.

Ahora bien, se acredita de acuerdo a los anexos presentados con el escrito de tutela que en efecto la parte accionante elevó derechos de petición ante las entidades AFP PORVENIR Y AFP COLFONDOS, con el fin de que se le diera respuesta frente a lo siguiente: AFP PORVENIR

PRIMERO. Me sea suministrada de manera física o digital todo lo que concierne al expediente digital de afiliación y cotización del señor HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO y, en especial lo siguiente:

- ✓ Historia laboral de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO.
- ✓ Copia de los formularios de afiliación firmados por HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO.
- ✓ Constancias de la información brindada en forma clara, precisa, oportuna y detallada de las características de los regímenes pensionales, de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes, así como de los riesgos financieros que asumiría en relación con las distintas modalidades pensionales y los parámetros relevantes para su cálculo para que HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO tomara su decisión.
- ✓ Comprobantes del consentimiento informado de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO al momento del cambio de régimen pensional en los formatos que existan (audios de comunicaciones telefónicas, formularios, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra clase de documento).
- ✓ Información y documentos requeridos por PORVENIR S.A. en el año 1998 para la correspondiente afiliación a este fondo.
- ✓ Toda la documentación que exista sobre la afiliación de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO en las bases de datos de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. en el año 1998.

SEGUNDO. Me sea suministrada de manera física o digital todo lo que concierne al expediente formado con ocasión del traslado de Administradora de Fondos de Pensión en la afiliación del HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO, esto es, la información relacionada con las semanas, cotizaciones, valores de ahorro individual, rendimientos y demás elementos propios del sistema entregados por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

AFP COLFONDOS:

PRIMERO. Me sea suministrada de manera física o digital todo lo que concierne al expediente digital de afiliación y cotización del señor HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO y, en especial lo siguiente:

- ✓ Historia laboral de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO.
- ✓ Copia de los formularios de afiliación firmados por HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO.
- ✓ Constancias de la información brindada en forma clara, precisa, oportuna y detallada de las características de los regímenes pensionales, de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes, así como de los riesgos financieros que asumiría en relación con las distintas modalidades pensionales y los parámetros relevantes para su cálculo para que HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO tomara su decisión.
- ✓ Comprobantes del consentimiento informado de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO al momento del cambio de régimen pensional en los formatos que existan (audios de comunicaciones telefónicas, formularios, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra clase de documento).
- ✓ Información y documentos requeridos por COLFONDOS en el año 2010 para la correspondiente afiliación a este fondo.
- ✓ Toda la documentación que exista sobre la afiliación de HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO en las bases de datos de la COMPAÑÍA COLOMBIANA

W W W . P L U S J U R I D I C O . C O M
Carrera 25A #1-31 of. 703 Parque Empresarial el Tesoro
+57 (314) 307 7322 +

DICO
OS

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.
COLFONDOS.

SEGUNDO. Me sea suministrada de manera física o digital todo lo que concierne al expediente formado con ocasión del traslado de Administradora de Fondos de Pensión en la afiliación del HÉCTOR DARIO CORREA TAMAYO, esto es, la información relacionada con las semanas, cotizaciones, valores de ahorro individual, rendimientos y demás elementos propios del sistema entregados por SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a COLFONDOS.

Ante tales afirmaciones de la parte accionante, la entidad AFP PORVENIR indicó haberle dado respuesta al accionante al derecho de petición el día 02 de noviembre de este año, luego, el Despacho al examinar dicha la respuesta, puede constatar que efectivamente la entidad AFP PORVENIR, dio respuesta de fondo a la petición instaurada por el señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, por conducto de su apoderada en la medida que refieren al asunto concreto y preciso, además la respuesta es acorde a lo peticionado:

Señor(a):
SARA BARRIENTOS GRISALES (Apoderada)
HECTOR DARIO CORREA TAMAYO
Correo: corporativo@plusjuridico.com
Medellín - Antioquia

Ref. Rad Porvenir: N.A.
C.C. 79040652
T.N. N.A.
COR

Respetado(a) Señor(a):

Reciba un Cordial saludo de PORVENIR S.A.

En atención al derecho de petición radicado en días pasados ante Porvenir S.A, nos permitimos dar respuesta de fondo, clara y congruente a su requerimiento y a las disposiciones previstas en la Ley 1755 de 2015 y en garantía del Derecho Fundamental de Petición contemplado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.

Sobre sus requerimientos puntuales:

- 1) Nos permitimos relacionar los siguientes documentos, concernientes al señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO.
 - Anexamos la historia laboral del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO precisando que actualmente el mismo no se encuentra vigente en Porvenir S.A , lo que implica que la trazabilidad de su camino pensional debe ser solicitada al fondo de pensiones en el que esté activo.
 - Anexamos los formularios de vinculación solicitados.
 - En lo que respecta a la entrega de SOPORTES FÍSICOS QUE DEN CUENTA DE LA ASESORÍA BRINDADA EN el proceso de vinculación, debemos señalar que no contamos con tales soportes, pues como es de su pleno conocimiento el proceso de afiliación se realizó de manera verbal para lo cual nuestros funcionarios reciben exhaustivos procesos de capacitación y formación en relación con el funcionamiento del Sistema General de Pensiones, las prestaciones que el mismo otorga, y en general lo atinente a la regulación que en materia de pensiones expide el Gobierno Nacional, con el fin de atender de manera eficiente y oportuna todas y cada una de las inquietudes que nuestros afiliados actuales y potenciales puedan llegar a tener en relación con su futuro pensional
 - Anexamos los formularios que demuestran el consentimiento del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, para llevar a cabo su cambio de régimen.
 - La información solicitada por Porvenir se encuentra plasmada en el formulario de afiliación que adjuntamos para su conocimiento, donde se evidencian datos básicos de contacto, beneficiarios y demás relaciones concernientes al señor CORREA TAMAYO.
 - Nos permitimos reiterar lo indicado en el punto 2, donde se encuentran toda la documentación diligenciada por el señor CORREA TAMAYO.
- 2) Adjuntamos toda la información que se encuentra en el sistema a nombre del peticionante donde se pueden ver reflejados los movimientos de su cuenta de ahorro individual (cotizaciones, contribuyentes, fechas), afirmando nuevamente que los soportes de su camino pensional, actualmente moran en el fondo donde este activo.

Así mismo, se acreditó por parte de esta dependencia judicial que la respuesta al derecho de petición fue puesta en conocimiento de la apoderada del actor, de acuerdo al informe secretarial que obra en el expediente digital de tutela.

Ahora bien, lo mismo no puede decirse de la respuesta que brido la AFP COLFONDOS, en primer lugar, no realiza un pronunciamiento expreso respecto de cada uno de los puntos que contiene la petición del accionante, en segundo lugar, aporta el formulario de afiliación de forma digital, pero se observa borroso, poco nítido, difícil en algunos apartes de ver la información allí consignada, y finalmente indica que para dar respuesta a las peticiones del actor quien actúa por intermedio de apoderada, debe cumplir el acto de apoderamiento unos requisitos por política e la entidad, sin embargo no sustenta tal afirmación, esto es, no allega soporte que informe sobre las políticas de la entidad en ese sentido, ni existe fundamento legal alguno que soporte la exigencia realizada frente al poder.

Considera el Despacho que dicha razón no es constitucionalmente aceptable como para poder liberarse del deber de dar respuesta clara y de fondo.

Luego, en este trámite especial y sumario se ha puede constatar y concluir que ciertamente AFP COLFONDOS sí ha vulnerado el derecho de PETICIÓN del señor HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, quien actuó por intermedio de apoderada judicial, derecho por el que pidió protección, pues a la fecha no se evidencia que AFP COLFONDOS, haya emitido respuesta a la solicitud presentada, el día 26 de septiembre de 2022, por lo que se procederá a amparar el derecho fundamental de petición del accionante, ORDENÁNDOLE a AFP COLFONDOS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, proceda a dar respuesta de fondo, clara y oportuna al accionante (quien actuó por intermedio de apoderada), de la solicitud presentada vía correo electrónico el 26 de septiembre de 2022 la cual refiere y aporta con en el escrito de tutela y le notifique la respectiva respuesta.

Se dispondrá que la entidad accionada AFP COLFONDOS, deberá dar cuenta al juzgado por escrito, inmediatamente se produzcan las actuaciones ordenadas y en el término para ellas aquí determinado.

Ahora con respecto a la AFP PORVENIR, conforme al acervo probatorio que obra en el expediente, encuentra este Despacho que cesó la vulneración al accionante - peticionario de su derecho fundamental de petición, por cuanto durante el curso de la acción de tutela se resolvió su solicitud, de fondo y concreta (Artículo 26 del Decreto 2591 de 1991), y que teniendo en cuenta lo reiterado por la Corte Constitucional se ha configurado un hecho superado, por lo que la presente acción carece actualmente de objeto frente a la AFP PORVENIR

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado por HECTOR DARIO CORREA TAMAYO, en contra de AFP COLFONDOS., por conducto de su representante legal o quien hiciera sus veces, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: SE ORDENA a AFP COLFONDOS., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, proceda a dar respuesta de fondo, clara y oportuna al accionante (quien actuó por intermedio de apoderada), de la solicitud presentada vía correo electrónico el 26 de septiembre de 2022 la cual refiere y aporta con en el escrito de tutela y le notifique la respectiva respuesta.

Se dispondrá que la entidad accionada, deberá dar cuenta al juzgado por escrito, inmediatamente se produzcan las actuaciones ordenadas y en el término para ellas aquí determinado.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado en la presente acción de tutela, respecto de la entidad AFP PORVENIR.

CUARTO: NOTIFICAR por el medio más expedito a las partes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1.991, advirtiéndoles que

contra la presente decisión se puede interponer el recurso de impugnación, según el art. 31 del citado Decreto y dentro de los tres días siguientes a la notificación; impugnación que debe ser allegada a través del correo institucional cmpl28med@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional la presente decisión, en caso de no ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

8

Firmado Por:
Sandra Milena Marin Gallego
Juez
Juzgado Municipal
Civil 028 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3105fa73a751cb77664f2b6239cadd9a533926ea8470f62ace6f08e842af98b**

Documento generado en 11/11/2022 12:34:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>